

PSOE



**POLITICAS
PARA EL
BIENESTAR
DE LAS
FAMILIAS**

propuestas
cuadernos socialistas

4

INDICE

1.- UN PROYECTO DE PROGRESO PARA LAS FAMILIAS.	3
2.- POLÍTICAS PARA LAS FAMILIAS	7
3.- LAS FAMILIAS EN ESPAÑA	
3.1. - Evolución jurídica	9
3.2.- Identidad y significado socio - familiar	10
4.- DE LA FAMILIA A LAS FAMILIAS	
4.1.- Familias monoparentales y uniones de hecho	12
4.2. - Las familias numerosas	16
5.- TRABAJO Y FAMILIA	
5.1.- La incidencia del trabajo en las familias	17
5.1.- Conciliación entre la vida laboral y la vida familiar	19
6.- EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA	
6.1. La fecundidad en España	22
6.2. La transición demográfica	23
6.3. Demografía y políticas migratorias	24
6.4. Problemas demográficos y políticas de apoyo a las familias	25
7.- LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	27
8. MEDIDAS DE APOYO A LA NATALIDAD Y A LA FAMILIA	
8.1.1 Prestación económica por nacimiento	29
8.1.2 Prestaciones por hijos a cargo	29
8.1.3 Otras medidas fiscales y sobre pensiones	29
8.2 Adopción internacional	30
8.3 Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral	31
8.4 Responsabilidad social de las empresas	33
8.5 Medidas de atención a menores y a personas dependientes	35
8.6 Medidas en materia de acceso a la vivienda	37
8.7 Medidas en el sistema educativo	39
8.8 Administración familiar	40

Consideramos que la institución familiar está directamente relacionada con la idea y el principio de la solidaridad. Las familias son la primera expresión de solidaridad que percibe todo ser humano, y merecen la máxima valoración social y el más importante y directo apoyo por parte de las instituciones públicas.

Los socialistas consideramos que las familias responden en la actualidad, en sus formas y concepciones, a la pluralidad y la diversidad de la propia sociedad. La familia del siglo XXI es una familia diversa, y por lo tanto nos queremos referir a ella en plural: "las familias". Con esta expresión queremos designar a la familia de siempre, y a aquellos otros modelos que se han ido desarrollando respondiendo al derecho de las personas de constituir núcleos afectivos y de convivencia que colmen sus expectativas y deseos. Para nosotros todas "las familias" tienen el mismo valor, todas se merecen el mismo respeto e idéntica protección y reconocimiento, porque nuestra concepción de las familias se basa en la libertad, la igualdad y la tolerancia.

Los socialistas, los progresistas, siempre nos hemos ocupado de las familias. Desde hace tiempo, venimos impulsado, profunda y constantemente el estado del bienestar, su implantación, desarrollo y consolidación, contribuyendo de manera sustancial a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto, también, de las familias. Sin embargo, nunca hemos enfatizado la palabra "familia", y eso ha contribuido a que hayan sido otros los que se han presentado a sí mismo como abanderados y defensores únicos de esta institución social. Muchas veces, mediante la retórica hueca que denuncia una ideología retrógrada.

Hoy, como ayer, queremos volver a desarrollar las mejores y más modernas políticas de apoyo a las familias, hoy, la familia sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones y la promoción de su bienestar y de su desarrollo va a ser una seña de identidad de todas nuestras acciones políticas.

Las familias del siglo XXI, encarnan, quizás mejor que ninguna otra institución, los valores y principios, que van a ser la base del cambio social y político que España precisa para afrontar su segunda modernización. Nuestra apuesta por las familias va a ser clara y diáfana, en ese empeño vamos a invertir los más importantes y apasionados esfuerzos, porque de ellas depende, en gran medida, el futuro común de nuestra sociedad.

1.- UN PROYECTO DE PROGRESO PARA LAS FAMILIAS.

Queremos situar a las familias, a los problemas y dificultades que las acechan, a los retos e incertidumbres que se ciernen sobre ellas en el centro de nuestra acción política. Para dar respuestas a las nuevas formas de familia y a los problemas que surgen en el seno de todos los tipos de familia; para buscar una relación equitativa y justa entre la familia y su entorno laboral, social y educativo; para eliminar los obstáculos, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan satisfacer sus deseos de formar una familia y a tener hijos; para repartir equitativamente las responsabilidades dentro del hogar. Queremos diseñar una política integral de atención a las familias, de apoyo y solidaridad hacia ellas, de promoción y desarrollo de una institución que es nuclear dentro de la sociedad.

La familia, todo tipo de familia, es un grupo humano, en el que se desarrolla, desde la ausencia de intereses, la relación de confianza y sinceridad más elemental que se pueda dar entre individuos, pues en su base está una relación de afectividad y amor, estableciéndose posteriormente entre sus miembros lazos de sangre.

En el seno de la familia se produce el nacimiento, el aprendizaje y el desarrollo de los sentimientos que acompañan, en mayor o menor medida, a todas las personas a lo largo de su existencia. Son esos sentimientos y esos afectos, los pilares del desarrollo humano.

Los lazos de confianza, afecto y solidaridad existentes entre los miembros de una familia, son un auténtico capital social, que establece la base del posterior capital humano y profesional de las personas. Ese capital social es el que sirve para que los individuos aprendan a ser ciudadanos, dentro de redes más amplias, en las que establece distintas relaciones de confianza y fidelidad, que se van acrecentando paulatinamente, en múltiples círculos, creando conglomerados y estructuras cada vez más complejas e interrelacionadas, que posibilitan la convivencia en una sociedad organizada.

En la familia, las personas buscamos nuestro destino a través de un proyecto vital pleno, libremente elegido, basado en el amor y el afecto, compartiendo con otros nuestra intimidad y los valores humanos básicos, dentro de un marco de solidaridad y ayuda mutua, compartiendo el bienestar entre todos sus miembros. Los socialistas consideramos que hoy las familias deben estar

informadas por los principios de libertad, igualdad y solidaridad, interna y externa.

Creemos que la libertad ha de ser el principio promotor de la familia. Todas las personas adultas deben tener derecho y oportunidad para elegir libremente su pertenencia a una familia y qué tipo de familia desean desarrollar. Todas las personas, deben tener la oportunidad de decidir libremente cuantos hijos desean tener, pero también deben de contar con las condiciones objetivas que hagan posible la consecución de esa libertad, que es también un derecho, para que sus deseos y pretensiones, su proyecto de vida, sea una realidad, y no se frustren las expectativas de nadie.

Además es necesario que esa libertad se practique en el interior de la familia, que todos sus miembros disfruten de ella para diseñar su propio proyecto de vida, en el que la familia no suponga un obstáculo, sino un estímulo y un apoyo a la consecución de los objetivos de cada miembro. La familia no puede seguir condicionando la libertad, especialmente de las mujeres, madres y hermanas, para desarrollar una vida laboral plena.

Las mujeres han carecido tradicionalmente de la libertad para desarrollarse personal y socialmente, al margen de la familia. En muchas ocasiones, la familia, ha supuesto un serio obstáculo para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres, especialmente porque sobre ellas ha recaído el peso de las tareas domésticas, del cuidado y educación de los hijos, y de la prestación de asistencia y atención a otros miembros de la familia. Nos atreveríamos a decir que las mujeres han sido las grandes sacrificadas en un tipo de familia tradicional y en una sociedad, que no ha prestado apoyos externos, especialmente institucionales y públicos, a las familias. Sólo gracias a ese sacrificio, los hombres han podido desarrollar una actividad laboral y social, acorde con sus deseos y expectativas; ese reparto de papeles se ha producido basándose en costumbres sociales muy arraigadas. Del mismo modo, las mujeres han asumido unas obligaciones que la sociedad y las instituciones nunca han llegado a reconocer. De hecho, muchos servicios y prestaciones, que deberían haberse asumido por la sociedad en su conjunto, a través de las instituciones, se han cubierto por las familias, y dentro de estas por las mujeres.

Esta conclusión nos conduce a la necesidad de que dentro de las familias impere el respeto al principio de igualdad entre sus miembros, especialmente de los progenitores entre sí, de los hijos e hijas entre sí, y del resto de sus

miembros. Todos los componentes de una familia son iguales en derecho, pero es lógico y positivo que los progenitores tengan una autoridad y un poder de decisión sobre la educación de los hijos, mientras se desarrollan, educan y forman, para ser adultos y buenos ciudadanos.

Es necesario que la igualdad de derechos y oportunidades se extienda a todo tipo de familia, con independencia de su configuración y del número y género de sus progenitores y descendientes. Ante la ley y las instituciones, todas las familias deben ser tratadas en pie de igualdad y no puede existir ningún tipo de discriminación a la hora de formar una familia, por el género de sus promotores o por su condición económica, social, procedencia o nacionalidad. Ello no obsta para que las instituciones apoyen con más medios, servicios y aportaciones a las familias más frágiles y más numerosas.

Los miembros de las familias deben ser iguales en obligaciones y en la posibilidad, oportunidad y derecho a ejercer estas obligaciones, que nacen de la naturaleza de la familia y de las relaciones que se configuran en su interior. Las obligaciones educativas, formativas y de atención a los hijos y descendientes, y las que provienen del cuidado y atención del hogar se deben repartir de forma igual y solidaria entre los progenitores, y ambos deben tener la oportunidad, el derecho y el deber de atender a las mismas sin menoscabo de su carrera profesional, de sus derechos laborales y de sus posibilidades de promoción y desarrollo social y cultural.

La familia es una institución fundamental para la sociedad y para el Estado, sólo a través de la familia es posible asegurar un proyecto de futuro de la sociedad en su conjunto. Por eso es necesario que la sociedad sea más solidaria y justa con las familias, atendiendo al papel fundamental que las mismas juegan, sobre la base de una misión social, que nadie encarga, pero que resulta fundamental para la existencia futura de la humanidad.

Las instituciones deben asumir muchos de los servicios que actualmente prestan las familias, deben mostrar mayores cuotas de solidaridad con las mismas, en correspondencia con la solidaridad que la familia muestra para con el conjunto de la sociedad. Para los socialistas las responsabilidades familiares han de ser compartidas socialmente, y esa corresponsabilidad será la base de las políticas que coadyuvarán a que muchas personas se decidan a formar familias, a convertirse en progenitores y a posi-

bilitar sus objetivos y deseos, que en la actualidad se ven dificultados por la falta de apoyos, y que en estos últimos años, se han convertido, incluso en un obstáculo.

Del mismo modo, en el interior de las familias, es necesario propiciar un mayor grado de igualdad entre sus miembros, que se debe basar en un trato justo y equitativo entre los mismos, formando a sus miembros en la solidaridad, el reconocimiento y el respeto intergeneracional.

2.- POLÍTICAS PARA LAS FAMILIAS

Con las políticas familiares se pretenden plantear, como un asunto común que atañe a toda la ciudadanía, problemas que afectan a la gran mayoría de las unidades familiares, para intentar darles respuestas colectivas.

Después de la Segunda Guerra, en algunos países europeos, se comenzó a hablar de políticas familiares. El interés en estas políticas ha sido creciente, y culminó en el seno de la UE, con la creación del Observatorio Europeo de Políticas Familiares en el año 1989. Por su parte, Naciones Unidas celebró en 1994, el Año Internacional de la Familia.

En la mayoría de los países de la UE, existe un cuestionamiento del Estado de bienestar, tal y como ha sido entendido hasta el momento, proponiéndose en muchos casos una redefinición del papel del Estado y de las instituciones públicas en las políticas sociales. A las incertidumbres que se deducen del planteamiento anterior, debemos añadir las que provocan los importantes cambios culturales; hábitos familiares, incorporación creciente de la mujer al mundo del trabajo, y los distintos y variables tipos de convivencia familiar. La dificultad se acrecienta, teniendo en cuenta que las políticas de familias, deberían venir a dar respuestas, en un campo en el cual el papel de los principales actores públicos y privados se está recomponiendo. Ello impone, además del diseño de programas y medidas, una seria reflexión sobre la necesidad de repensar el papel que le corresponde a la familia, especialmente con relación a los principios en los que se sustenta. También, sobre su función como prestadora de bienestar social.

Pretendemos en este documento realizar una serie de propuestas que comprendan, desde una visión global, todas aquellas políticas que están directa o indirectamente relacionadas con las familias. Por eso, las propuestas, que aquí hacemos, tienen que ver en sentido estricto con la definición de políticas de familias, que entendemos como el conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas.

Sin embargo, en un sentido amplio, para nosotros, las políticas familiares también engloban otras que existen desde hace años, pero que se han tratado de forma discontinua, poco sistematizada y parcial. Nos referimos a los graves

problemas demográficos que existen en nuestro país, y en otros países del sur de la UE. Respecto a los cuales, desde la izquierda, se han tenido dificultades ideológicas para su abordaje, y para proponer medidas que puedan paliar los efectos de la transición demográfica, por el temor a que esas políticas fuesen calificadas como “natalistas”.

Creemos también que, de una u otra forma son políticas de familias, todas aquellas que hacen posible compatibilizar la vida laboral y la familiar, que resuelven las desigualdades o discriminaciones entre las diferentes formas de convivencia y, en fin, aquéllas que demuestran un interés público por los asuntos relacionados con las distintas formas de convivencia que eligen los ciudadanos y con sus objetivos y expectativas.

3.- LAS FAMILIAS EN ESPAÑA

3.1 Evolución jurídica

Aunque a estas alturas pueda resultar anacrónico, durante mucho tiempo hablar de familia, era sinónimo de hablar de matrimonio canónico, ya que la mayor parte de las familias se desarrollaba a partir de este tipo de figura jurídico - religiosa. A partir de 1978, el Estado se configura como laico y aconfesional y ello se traduce jurídicamente en que el matrimonio civil deja de ser subsidiario y se establece un sistema matrimonial de libre elección. La Constitución, en su artículo 16, consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto y en su artículo 32 establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica”.

La proclamación del principio de igualdad en el artículo 14 de la Constitución afecta a la institución matrimonial y familiar, cambiando la situación, que al menos jurídicamente, hasta ese momento, correspondía a la mujer y a los hijos. La propia Constitución reconoce la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial, y con ello se produce una adaptación de la legislación que pretende, ante esa disolución, proteger a los sujetos más débiles de la familia. Esa obligación de protección de los hijos se extiende a todos los poderes públicos en el artículo 39 de la Constitución.

También cambia la relación de los progenitores con los hijos, ya que la patria potestad no se ejerce desde la *autoritas* del padre, que a su vez era reconocido como cabeza de familia, sino desde la igualdad de derechos y obligaciones de ambos progenitores sobre los hijos. Por lo tanto, existe un derecho – obligación para que, de común acuerdo, los progenitores velen por el cuidado, alimentación, sostenimiento y formación de los hijos.

El artículo 39.1 establece que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, el artículo recoge el espíritu de la Carta Social Europea de 1961, al considerar a la familia digna de protección por tratarse de un institución esencial en la sociedad.

Nuestra Constitución, sin embargo, no contempla sólo a la familia tradicional y nuclear, sino que con ese concepto se refiere a todas aquellas formas de convivencia, que ya no son sólo matrimoniales, y que afectan a un grupo humano que decide mantener una relación estable. Es este tipo heterogéneo de uniones, de

convivencia, al que extiende su protección nuestra Carta Magna y respecto al que se reconoce la igualdad de todos sus miembros y el respeto a su dignidad.

El sólo reconocimiento de esta diversidad no es suficiente para resolver la complejidad que se presente debido a las múltiples transformaciones que este tipo de uniones suponen y la variedad y posibilidades que se abren cada día. Así, las nuevas técnicas de reproducción y los avances tecnológicos futuros ya están deparando novedosas formas de filiación que distan mucho de las uniones familiares tradicionales. Del mismo modo, las uniones de hecho, que han sufrido un crecimiento importante en los últimos años, están obligando a los legisladores y a las instituciones a realizar una adaptación jurídica y administrativa de lo que ya es una realidad social. Todo ello es producto del reconocimiento de la igualdad y la libertad de todas las personas, y por lo tanto de su idéntica capacidad y oportunidades a la hora de formar una familia o sentirse parte de una unión de convivencia estable, con independencia de su opción sexual, religiosa o de cualquier otra condición personal o social.

3.2.- Identidad y significado socio - familiar

Hasta hace unos años, las personas vivían, fundamentalmente, en torno a dos núcleos familiares; provenían de una familia, y se integraban en otra que ellos mismo habían constituido, ambas familias marcaban el paso entre dos etapas de sus vidas. En ambas etapas las personas, a través de la familia, obtenían distintas aportaciones y desarrollaban diferentes papeles o actuaciones.

La familia ha tenido un valor simbólico esencial y ha supuesto un elemento básico dentro de los procesos de reproducción social, económica, demográfica o cultural. De las mencionadas funciones, la económica y la demográfica han entrado en crisis, especialmente esta última, ya que la familia no está cumpliendo, al menos eso es predicable respecto a la familia tradicional en España, su papel demográfico. En cuanto al aspecto económico, la esperanza de vida de las personas hace que la familia sea innecesaria a la hora de asegurar el sostenimiento económico en sentido estricto, aunque siga constituyendo el núcleo de protección y apoyo para sus miembros mientras se produce su independencia económica y vital.

La transición del modelo tradicional al actual ha propiciado que la familia se especialice en dos funciones esenciales: la socialización de los hijos y la estabilidad psíquica y afectiva de los adultos, además de convertirse en sí misma

en la nueva unidad de consumo. Del mismo modo la familia “patriarcal” ha dado paso a la familia “simétrica”, aunque no podamos aún predicar la completa democratización de la familia.

La familia ha ido evolucionando con la propia sociedad, y esa es una de las características fundamentales de nuestro tiempo, su capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, a las nuevas relaciones. Su dinamismo ante los cambios sociales. No obstante, ese proceso no ha sido fácil. Si tenemos en cuenta la estructura rígida de la familia patriarcal tradicional, coincidiremos en que los cambios han producido erosiones en ese tipo familia y en sus componentes; pero también ha supuesto que las personas, con el objeto de ser más felices, hayan buscado otras estructuras familiares que se adapten mejor a la sociedad, a sus necesidades o que, simplemente, estén más acordes con sus aspiraciones y convicciones.

La familia también sigue evocando el concepto de hogar, como lugar de convivencia de los miembros de un mismo núcleo familiar, sin embargo la diversidad de tipos de relaciones implican en algunos casos varios hogares en sentido físico, si bien como unidad de consumo y estructura de convivencia podemos seguir manteniendo que el hogar es la unidad básica de solidaridad cotidiana.

Por lo tanto, la familia sigue girando en torno a objetivos y funciones tradicionales a los que suma nuevos objetivos, coincidentes con la legítima búsqueda de uniones en las que las personas puedan ser más felices. Eso supone, no que las familias estén obsoletas o sean rechazables, sino más bien que las mujeres y hombres actuales rechazan verse abocados de forma obligatoria o prioritaria a estructuras rígidas, jerárquicas, heterosexistas o exclusivamente reproductoras.

Las familias no están pasadas de moda, son más necesarias que nunca, pero sí están obsoletas las familias que reprimen y limitan la libertad de sus miembros, que crean desigualdades artificiales y que niegan la justicia interna en la vida privada, mientras la exigen en la vida pública o ciudadana. Por eso los ciudadanos buscan familias más democráticas, en las que la justicia interna coincide con la justicia que se predica en la propia sociedad. Los nuevos modelos de familia, sobre la base de esos principios, pueden coadyuvar a que emerja una democracia social y política más avanzada, más compleja, pero también más adaptada a los tiempos que nos van a tocar vivir.

4.- DE LA FAMILIA A LAS FAMILIAS

La familia se ha constituido tradicionalmente en España en torno al vínculo matrimonial de dos personas de distinto sexo. Ese modelo de familia sigue siendo mayoritario en nuestra sociedad, y aún hoy son mayoría las parejas de distinto sexo que contraen matrimonio con el objeto de desarrollar un proyecto familiar. Sin embargo, existen otros tipos de familia, que merecen el mismo respecto, reconocimiento y protección que el modelo de familia unida por un vínculo matrimonial.

Este es el motivo por el que los socialistas hablamos de “política de familias”, frente a la política de familia, en singular. Las familias no matrimoniales son minoritarias en España, pero no por ello deben ser marginadas o ignoradas, sin duda, su falta de reconocimiento, por parte de las Administraciones es propia de otros tiempos, en los que sólo un tipo de familia era posible y legal. La política para las familias, para todas las familias, que defendemos los socialistas quiere responder a esa diversidad, y por lo tanto abarca a la familia unida en torno a un vínculo matrimonial, a las familias numerosas, a las monoparentales y a las parejas de hecho, porque entendemos que todas ellas merecen el amparo y el reconocimiento del Estado y de las instituciones.

4.1.- Familias monoparentales y uniones de hecho

Junto a las familias tradicionales, unidas por vínculos matrimoniales, religiosos o civiles, han crecido en España, más tarde y con menos amplitud que en los países del norte de Europa, otro tipo de familias. Estas nuevas familias tienen formas muy variables, cada vez más extendidas las uniones o parejas de hecho, que se basan en la convivencia de dos personas, constituyendo un núcleo familiar unido por relaciones afectivas. También son ya numerosas las monoparentales, concepto en el que se integran diversas formas de familia. La monoparentalidad clásica responde a los hombres y mujeres que se quedan viudos; la sobrevenida es el resultado de una separación o divorcio; son también frecuentes las madres solteras; al tiempo que aparece como reivindicación de la legitimidad de la pluralidad familiar, una nueva familia, en la que los progenitores buscan deliberadamente la monoparentalidad frente a la biparentalidad. Fruto de esta realidad sociológica se ha acuñado la definición de familia monoparental, como “aquella que incluye al menos un hijo con hasta 18 años en convivencia con su padre o madre”.

Todas estas formas de nuevas familias buscan la convivencia de sus componentes y están dentro de la normalidad, si bien encuentran múltiples obstáculos para su reconocimiento como tales familias, en orden a los mismos derechos e idénticas oportunidades, que las familias que se basan en una unión conyugal.

En España han ido apareciendo distintas leyes, especialmente en el ámbito autonómico, en la cuales se reconocen derechos y se extraen consecuencias de las uniones de hecho. En otras ocasiones, han sido los tribunales los que se han adelantado a las previsiones legislativas, dando ciertos efectos a las uniones de hecho. Lo que demuestra, en buena medida, el retraso y la falta de previsión, con el que desde las instituciones, fundamentalmente desde el poder ejecutivo y legislativo, se han ido afrontando cambios que socialmente se están produciendo hace tiempo. En este sentido, como en tantos, la sociedad ha avanzado mucho más rápido que las leyes, y la realidad social de las familias españolas ha superado desde hace tiempo las previsiones legislativas y políticas. Por eso es necesario redoblar nuestros esfuerzos a fin de equiparar el ordenamiento jurídico y las políticas para las familias, a la nueva situación, a las nuevas formas, y a los nuevos principios en los que se basan las uniones afectivas.

Adecuar nuestro ordenamiento jurídico a estas nuevas realidades no sólo es una prioridad política, también es un deber que nos impone la propia Constitución al consagrar como valor superior del ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad, además de proscribir la discriminación por razón de estado civil o de nacimiento. Cuando el artículo 39 de la Constitución establece como principio rector de la política social y económica la protección de la familia, no excluye a ningún tipo de familia, por lo tanto no sólo deben regularse esas nuevas situaciones, también se han de corregir las desigualdades y discriminaciones que sufren esas nuevas formas de familia.

Las políticas en el caso de las familias monoparentales, generalmente mujeres con hijos a cargo, se justifican además por la mayor fragilidad de estos núcleos que, en la mayoría de las ocasiones, se instalan a su vez en hogares monoparentales, en los que se produce una escasez de ingresos, que unida a la ausencia de solidaridad económica y doméstica entre los miembros adultos, por la ausencia de algunos de ellos, implica una carga excesiva en el miembro adulto de la familia monoparental. La autonomía de estas familias se reduce respecto a las familias fundadas en la unión de dos adultos, e incluso respecto a las familias monoparentales que provienen de familias anteriores.

Se trata de buscar soluciones a los problemas de dependencia que se plantean a las familias monoparentales, ya que su escasa autonomía hace que sus miembros, especialmente el miembro adulto, sufra una dependencia excesiva de otros parientes que, en ocasiones, aunque necesaria para desarrollar su actividad laboral, reduce su autonomía, su libertad e incluso su intimidad. Las familias monoparentales suelen recurrir con frecuencia a la ayuda de las abuelas, que son quienes proporcionan cuidados a los nietos y atención a las labores domésticas más urgentes. Esta ayuda es positiva y tanto los miembros adultos de las familias monoparentales, como las propias abuelas, la juzgan necesaria y deseada por ambas partes, sin embargo en otras ocasiones es el único recurso para que el miembro que percibe los ingresos en el núcleo familiar pueda atender sus actividad laboral, convirtiéndose más en un remedio obligado que una solución pactada. Del mismo modo, a menudo, las abuelas se ven sobrecargadas en sus tareas habituales, teniendo que atender a dos hogares y reduciéndose notablemente su tiempo de ocio o de convivencia efectiva con su cónyuge.

Todo ello obliga a buscar políticas que doten de mayor autonomía a las familias monoparentales, que las hagan más libres y menos dependientes respecto a los cuidados y atenciones exclusivos de los familiares más próximos, y que en parte compensen las atenciones que proporcionan estos familiares. Con ello se reducirá la vulnerabilidad de estas familias y se facilitará la compatibilidad entre la actividad laboral del miembro adulto y su obligación de cuidado de los hijos, proporcionándole mayor libertad para realizar otras actividades, para realizar un trabajo que le resulte satisfactorio con su formación y aspiraciones y que también sea acorde con sus necesidades y obligaciones familiares. A su vez será necesario promover estrategias informativas y formativas para evitar embarazos no deseados, proporcionando más información para un uso correcto de métodos anticonceptivos, haciendo éstos más accesibles a la población, especialmente a los más jóvenes, reduciendo el recurso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Respecto a los tipos de vínculos sobre los que se constituyen las familias, la realidad social ha ido permanentemente por delante de la realidad legal, y desde hace años, muchas familias se constituyen en torno a uniones no matrimoniales. Estas "uniones de hecho" responden al más puro y genuino ejercicio de la libertad reconocido por nuestra Constitución, y por el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, hasta ahora las parejas de hecho se han visto discriminadas respecto a las uniones matrimoniales. La legislación no ha reconocido plenamente los efectos que se derivan de este tipo de unio-

nes. Es por ello por lo que se precisa de una legislación que regule en su integridad este tipo de situaciones, más allá de los reconocimientos parciales de determinados derechos o de los que se van produciendo de facto a través de la analogía legal.

Del mismo modo, ha llegado el momento de que la política y la legislación proporcionen soluciones y den respuestas a todas a aquellas personas que, desde el más libre y genuino ejercicio de su libertad personal, deciden unirse con una persona del mismo sexo, con el objeto de formar una familia. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia, en la cual se avanza con lentitud y de forma desigual, muchas veces hipócrita. En algunas Comunidades Autónomas y en muchos Municipios, Administraciones que se han mostrado más sensibles al estar más cerca de los ciudadanos, se ha avanzado a través del establecimiento de leyes de parejas de hecho o de la regulación de registros, tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Sin embargo, en la legislación nacional no se ha llegado al reconocimiento de esa realidad, la de las parejas, incluso las familias compuestas por personas del mismo sexo, que es tan legítima como las uniones de personas de distinto sexo.

Nos encontramos ante personas con capacidad para desarrollar una vida autónoma, con libertad para elegir y encauzar su afectividad y por tanto sus relaciones, que históricamente han estado discriminadas, sus demandas relegadas, y que aún hoy, en plena democracia, sienten como el Estado, las instituciones y la política, se niegan a reconocer la plenitud de sus derechos ciudadanos. Muchos países europeos han hecho grandes avances en este terreno, a veces, a través de pasos intermedios y de forma lenta pero progresiva, y sin embargo en otros países, entre ellos en España, se siguen adoptando comportamientos y actitudes que merecen ser calificadas como atávicas.

También es necesario promover reformas profundas de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de que las personas del mismo sexo que lo deseen puedan contraer matrimonio. El derecho a establecer una unión familiar sobre la base de un vínculo matrimonial, con los efectos y consecuencias que del mismo se derivan, no puede estar limitado por razón del sexo de los contrayentes.

Mientras todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en un Estado no tengan plenamente garantizado el derecho a elegir y ejercer libremente su opción sexual, y las relaciones y consecuencias que de ella se derivan, no podremos

predicar que existe una democracia plena, que da respuesta a las demandas y aspiraciones legítimas de todas y cada una de esas personas.

4.2. Las familias numerosas.

Las familias numerosas que, en uso de su libertad y como producto de su amor y de su concepción de vida, deciden constituir núcleos de convivencia con un número elevado de miembros, sean estos hijos naturales, adoptivos o convivientes de distintas generaciones, deben ser especialmente reconocidas y valoradas por nuestra legislación y por las políticas de apoyo a las familias. Las políticas de familia no han tenido en cuenta de forma suficiente a estas familias, que incluso han sido discriminadas, infravaloradas, y limitadas en su derecho y en su libertad real, al negárseles las condiciones objetivas para poder constituir una familia que por su volumen y circunstancias merece un apoyo decisivo, proporcional a la generosidad y el esfuerzo que sus miembros demuestran con toda la sociedad.

Las políticas de apoyo a las familias numerosas han de ser más equitativas, más justas y generosas. En España disponemos de un modelo de apoyo a la familia, en función de la renta, que seguramente no es el más idóneo, por lo tanto debemos comenzar a cambiarlo, fijando nuestra vista en otros países de la Unión Europea, con sistemas más generosos, que disponen de amplias políticas de ayudas económicas y servicios, que no sólo se cuantifican a partir de la renta de sus preceptores. No podemos dar un giro radical al modelo español actual, pero si debemos introducir suficientes cambios para invertir las tendencias políticas de apoyo a las familias, especialmente a las familias numerosas.

Mayor equidad y progresividad a la hora de establecer las políticas fiscales de ayuda a las familias numerosas, más y mejores prestaciones y servicios, acciones integrales de apoyo en ámbitos como la educación, la vivienda o el transporte, constituyen un deber de toda la sociedad para con estas familias. Los socialistas queremos impulsar ese reconocimiento institucional y social de las familias numerosas, porque su papel es relevante en la construcción de nuestro futuro.

5.- TRABAJO Y FAMILIA.

5.1. La incidencia del trabajo en las familias

El trabajo es un elemento fundamental que influye de manera determinante en la formación y desarrollo de las familias. Las parejas estables que quieren constituir una unidad estable de convivencia se ven influidas directamente por la existencia o ausencia de trabajo y por el nivel de ingresos que reporte. El trabajo por cuenta ajena ha sido un elemento de emancipación de las personas. Éstas ya no dependen de la herencia o del trabajo que se les proporcione dentro de la unidad familiar, ahora son más libres para buscar una salida laboral que les permita la emancipación y la autonomía frente a la familia de la que provienen. Esa libertad también se concreta en que puedan elegir libremente la pareja con la que van a compartir de forma estable un proyecto de vida, sin estar influidos o depender de las opiniones de la familia que, en muchos casos, al condicionarles económicamente, también les condicionaba su convivencia.

La influencia del desempleo en los comportamientos y en los proyectos de formación de núcleos familiares independientes, está siendo una constante en las nuevas generaciones. Desde hace años, los jóvenes tienen relaciones de pareja estable, pero no terminan de emanciparse para crear hogares propios, debido principalmente, en unos casos, a la precariedad laboral, en otros, a la ausencia de empleo y, en muchos, a las dificultades de encontrar una vivienda asequible al nivel económico inicial del nuevo núcleo familiar.

El trabajo influye decisivamente en la decisión de la pareja de tener hijos. En España han crecido los hijos extramatrimoniales, pero aún hoy en día la mayoría de los hijos nacen dentro de una unión matrimonial. La estabilidad en el trabajo, o la suficiencia de los medios económicos que el mismo reporta, son básicos a la hora de que la pareja decida tener su primer hijo. Pero la relación más evidente entre trabajo y natalidad es la que hace depender la fecundidad de la mujer casada, o de la que vive en pareja, de su trabajo o de la relación que la mujer entabla con el mundo laboral.

Según la mayoría de los estudios, el trabajo de la mujer ha retrasado, concentrado y reducido la natalidad. Si bien investigaciones más avanzadas llegan a la conclusión de que el trabajo influye más en las actitudes que en los comportamientos y, por lo tanto, las diferencias reales entre las mujeres que tra-

bajan y las que no lo hacen no son tan claras a la hora de determinar su fecundidad. De ello se puede deducir que, además del trabajo de la mujer, los elementos que influyen negativamente en su fecundidad son otros muchos que están relacionados con cambios culturales y sociales. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo nos ha anunciado históricamente cambios sociales que posteriormente se han generalizado.

Si el tipo de trabajo y la seguridad en el mismo son determinantes a la hora de constituir una unidad familiar, también lo son para definir la posición de la familia dentro de la sociedad, especialmente en relación con su entorno, pero también en los papeles que van a desempeñar los miembros de la familia.

La tasa de actividad en jóvenes solteros es similar en hombres y mujeres. Sin embargo, en mujeres casadas y hombres casados las diferencias son notables, duplicándose casi la tasa de actividad de los varones respecto a las mujeres. En España era tradicional que las mujeres abandonasen el puesto de trabajo durante la crianza de los hijos, pero este comportamiento empezó a cambiar debido a la inseguridad añadida que provoca ese abandono, ya que no existe la esperanza de que pueda producirse una reincorporación al puesto de trabajo, o de que ésta vaya a realizarse en las mismas condiciones profesionales y económicas con las que se dejó temporalmente la actividad laboral.

Para el conjunto de mujeres casadas la tasa de actividad en España es de las más bajas de la UE. Este dato es ciertamente revelador, ya que, como han señalado muchos expertos, en España a pesar de la escasa incorporación de la mujer casada al mundo del trabajo, la tasa de fecundidad también está entre las más bajas de la UE. Ello se debe a que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo se ha producido tardíamente en España, situándose nuestro país en el grupo de países del sur de la Unión Europea, donde los procesos están siendo similares entre sí.

Ante un aumento de la oferta de empleo, con el objetivo de cumplir con los criterios que se han venido fijando estos años en la UE, las tasa de actividad de hombres y mujeres tendrán que crecer desigualmente. Ello sólo será posible si la tasa de incremento de empleo de la mujer es, aproximadamente, el triple que en los hombres. En el caso de los hombres, los objetivos sólo podrán alcanzarse si se retrasa la edad de jubilación. En las mujeres, sólo será posible aumentar significativamente su grado de participación a través de medidas que la promuevan.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de la mujer con hijos para acceder al mercado de trabajo depende de la posibilidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Si a ello añadimos que cualquier política para incentivar la fecundidad, necesaria en España como luego podremos exponer, persigue el aumento de hijos, las dificultades para las mujeres serán aún mayores en el futuro, por lo que su incorporación al mundo del trabajo sólo será posible si concebimos una estrategia integral de apoyo a las familias, a través de ayudas y servicios. En España, la insuficiencia de medidas de este tipo podría ser un obstáculo notable a la hora de adaptar nuestra oferta de trabajo a la demanda derivada de las necesidades del mercado, lo cual repercutiría en una dificultad para alcanzar un ritmo de crecimiento sostenido en los próximos años.

5.2.- Conciliación entre la vida laboral y la vida familiar

Entender algunos fenómenos de clara actualidad, como la reducida tasa de natalidad, exige tener en cuenta la evolución de la situación social de las mujeres en los últimos años y su incorporación al mundo laboral, que se ha producido sin que hayan modificado los roles tradicionales de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Tradicionalmente, las mujeres se ocupaban de la atención familiar y doméstica, y los varones estaban en el trabajo productivo y en la vida pública. Ahora, ellas están en el trabajo productivo y también en el reproductivo, y por supuesto en la atención y el cuidado de la población de mayor edad. Los hombres, sin embargo, no han asumido como propias las responsabilidades familiares y domésticas.

Esta situación está generando problemas de diversa índole:

- Representa una sobreexplotación de las mujeres que trabajando fuera del hogar se tienen que hacer cargo, además, de las tareas domésticas.
- Dificulta la incorporación de las mujeres al empleo, impidiendo el crecimiento de la tasa de actividad, y manteniendo una clara situación de desigualdad laboral, que a su vez no beneficia el desarrollo de la natalidad puesto que la inestabilidad en el empleo y la carencia no deseada del mismo están claramente relacionadas con el menor índice de natalidad.
- Genera problemas en las relaciones familiares y de pareja.

- Afecta a la disminución de la tasa de natalidad, puesto que a pesar de que diversos estudios demuestran que a los españoles y las españolas les gustaría tener más hijos, dicen no hacerlo porque lo viven como una carga económica y como una limitación para su desarrollo personal y profesional.

Defendemos algo más que la superación de la cultura derivada de la división de *roles*, desde la perspectiva de la voluntad personal entre hombres y mujeres para compartir la responsabilidades familiares. Queremos que cambie la perspectiva de la voluntad social para promover un nuevo marco de convivencia basado en modelos modernos de familia. Ese cambio ha de venir acompañado de un claro liderazgo político que impulse reformas tendentes, no sólo a producir cambios en el ámbito privado, sino especialmente en el terreno social y público. Ese discurso político y programático es el de los socialistas y con él emprenderemos una estrategia integral de apoyo a las familias.

Como se ha escrito más arriba, otro de los cambios necesarios es la redistribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres. En la actualidad, el hombre dispone de su tiempo, que se ha constituido en unidad de cambio, a un precio determinado, y con el que puede comprar tiempo libre, ocio, consumo, etc. La mujer no dispone de su tiempo, que es una unidad de uso y no de intercambio, y que dedica de forma decisiva al trabajo familiar o laboral. Este tiempo, que la mujer dedica al trabajo familiar, no ha sido valorado en términos macroeconómicos. Las investigaciones que se han realizado para estimar el valor de ese tiempo han determinado una revalorización del trabajo de las mujeres, pero también han puesto en evidencia la situación de explotación oculta que produce el actual sistema de reparto de roles.

En el futuro será necesario producir modificaciones estructurales, a través de políticas reguladoras de los usos del tiempo, más acordes con la realidad de los horarios familiares y laborales, a la vez que se impulsan políticas de corresponsabilidad en las tareas domésticas, educativas, formativas, etc.

Frente a una demanda de políticas imaginativas, que impulsen cambios estructurales y que se sitúen al frente de ese liderazgo político, encontramos escasez de políticas públicas de apoyo a las familias, que hasta ahora han mantenido en muchos casos esa conciliación de la vida laboral y familiar gracias a la importante contribución y el apoyo que para las mujeres madres y trabajadoras han supuesto otras mujeres de su entorno familiar, básicamente las

abuelas. Esta situación, sin embargo, que se ha producido también en otros países con una estructura familiar amplia y escasa movilidad geográfica de las personas, es generacional, es decir, es poco probable que las mujeres que hoy son profesionales hagan este papel con sus nietos en el futuro.

En este momento, al contrario de lo que ocurría en otras épocas en las que para el feminismo hablar de familia equivalía a apoyar a ese núcleo donde se producía la mayor opresión para las mujeres, plantear una política dirigida a las familias es una necesidad para las mujeres y los hombres, siempre que dicha política tenga como objetivo su emancipación y les proporcione instrumentos que realmente ayuden y hagan posible la conciliación de la vida profesional y familiar. La pregunta sobre si es compatible la protección a la familia con la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, tiene una clara respuesta: sí. No sólo son políticas compatibles, son necesarias.

6.- EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

La población española no ha dejado todavía de crecer, pero a un ritmo cada año más lento. Algunas cifras: en 1965, el crecimiento natural fue de 400.000 personas, en 1980 de 280.000, en 1990 de 68.000 y en 1999 de 7.400. Desde hace al menos cinco años, aumenta el peso de la inmigración en el crecimiento demográfico total.

Todos los datos indican un claro proceso de envejecimiento de la población española, una tendencia creciente del número de personas mayores y de su peso en la población total, así como a la disminución de la ratio de capacidad (número medio de personas en edad de trabajar por el de personas de 65 años o más).

La proporción de personas mayores de 65 años es actualmente del 17%, y alcanzará el 18,2% en el año 2010, el 20,2% en 2020 y el 31,5% en 2050, siempre que la fecundidad se estabilice en 1,72 hijos por mujer a partir del 2015, y entren alrededor de 50.000 trabajadores inmigrantes anualmente (63.000 personas). A largo plazo la fecundidad puede ser determinante a la hora de establecer el peso de los mayores en el total de la población, ya que en 2050 esta proporción será de 37,2% si se mantiene el nivel actual, pero descenderá hasta el 29,6% en el caso de que aumente hasta alcanzar el nivel de reemplazo (2,05 hijos por mujer) a partir del año 2028.

La disminución de la población española a largo plazo, si se mantienen los niveles de fecundidad actuales, parece difícil de evitar. Si bien el aumento de población no resuelve por sí solo los problemas que plantea el envejecimiento de la población, si los atenúa a largo plazo. Podemos afirmar con rotundidad que más que cualquier otra variable, la natalidad va a condicionar el futuro de la población española a largo plazo.

6.1. La fecundidad en España.

España goza del dudoso honor de tener la fecundidad más baja del planeta (en torno a 1,2 hijos por mujer), en compañía de otros países del sur de Europa. A esta característica se unen otras dos particularidades muy significativas: la edad cada vez más tardía a la que se producen los nacimientos y el fuerte déficit de nacimientos entre los jóvenes de 20 a 30 años. Los jóvenes españoles permanecen en el hogar familiar hasta edades avanzadas, a las que, en otros países europeos están o casados o

emparejados y con algún hijo. Además, una vez casados, el primer nacimiento se pospone varios años, lo que aumenta aún más el retraso, con lo cual el segundo hijo, en la mayoría de los casos, acaba por no llegar. Actualmente la edad media a la que las mujeres españolas tienen sus hijos es de 30,3 años y el primer hijo llega, en promedio, a los 29 años, las cifras más retrasadas de la Unión Europea.

Los datos son suficientemente elocuentes acerca de los cambios acaecidos en estos años. Los jóvenes de 20 a 24 años han dejado prácticamente de tener hijos, de 0,7 de promedio en 1976 han bajado a 0,1 actualmente. Este fenómeno, aunque se da en la mayoría de los países próximos, lo hace con mucha menor intensidad. El grupo de 25 a 29 ha pasado de 1 hijo por mujer a principios de los setenta a 0,34 hijos actualmente. Incluso en Italia, un país con un nivel de fecundidad muy bajo, la de los jóvenes es más elevada que aquí. La mayor fecundidad de las mujeres mayores de treinta años, debido a la recuperación parcial del retraso acumulado en los veinticinco años de disminución que llevamos, encubre en parte la bajísima fecundidad de las jóvenes, cuyo record nadie nos disputa.

6.2. La transición demográfica.

En todos los países desarrollados la natalidad ha disminuido dentro de un proceso largo y complejo de ajuste al aumento de la esperanza de vida, llamado transición demográfica. Se trata de un proceso muy antiguo en algunos países, que en España se ha producido a lo largo del siglo XX. No vale, por tanto, comparar los niveles actuales a los que teníamos a principios de siglo pasado, ya que el reemplazo de generaciones se produce ahora con dos hijos por mujer, sin inmigración, mientras que eran necesarios más de cuatro hace apenas un siglo, debido a la fortísima mortalidad.

La transición demográfica supuso un fuerte aumento de la población, manteniéndose el modelo de reproducción basado en una familia rígida con separación de roles, entre otras razones porque, en un período de expansión de la población activa masculina, la incorporación de las mujeres al trabajo era prescindible.

La propia dinámica del desarrollo demográfico y económico ha modificado la situación de las mujeres, disminuyendo el peso de las maternidades necesarias y aumentando la productividad de las tareas domésticas. Este aligera-

miento de las tareas tradicionales se conjuga con el mayor acceso de las mujeres a la educación y con cambios en la estructura productiva, favoreciendo la presencia de las mujeres en el mercado laboral. Este cambio, como muchos otros, se produce en España tardíamente.

Se trata de una transformación radical del modelo reproductivo, basado antes en un reparto inflexible y desigual de tareas entre hombre y mujeres, gracias al cual eran compatibles la familia y el trabajo para los hombres, al precio de una incompatibilidad casi absoluta para las mujeres al mundo laboral, no es sólo consecuencia de la lógica individual de las mujeres, que ven el trabajo remunerado como una vía de emancipación, sino que está también basada en la lógica familiar, dada la creciente necesidad de disponer de dos ingresos y, cada vez más, en la lógica del propio mercado de trabajo. Este último factor tiene especial relevancia en España, ya que a medida que disminuya la población activa, las empresas se encontrarán con mayores dificultades para encontrar personal. Este cambio social irreversible, se enfrentará en nuestro caso a dos obstáculos: las desigualdades en el mercado de trabajo, con una tasa de paro femenino que duplica a la de los hombres, y el desigual reparto de las tareas en el seno del hogar.

Este es el motivo por el que se precisan políticas activas que hagan posible la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, que exigirán necesariamente un cambio que concilie la vida familiar con el trabajo fuera del hogar, lo que, a su vez requerirá una adaptación de la sociedad y de las políticas sociales a esa nueva situación. Hasta el momento ese cambio social ha descansado casi por completo sobre las espaldas de las mujeres y sobre su calidad de vida, tratándose, por lo tanto, de una respuesta individual, respecto a un problema que atañe a toda la sociedad, del que todos deben responsabilizarse.

Esta respuesta individual se traduce en que las familias se han visto obligadas a recurrir, como estrategia para adaptarse a esos cambios, a reducir la fecundidad por debajo de lo deseado, para compatibilizar tres exigencias absorbentes, el cuidado de los hijos, el hogar y la dedicación a una actividad laboral remunerada.

6.3. Demografía y políticas migratorias.

Uno de los rasgos relevantes de evolución demográfica reciente de España, que se ha producido a partir de los años ochenta, es el cambio en la composición de nuestro saldo migratorio con el exterior. El saldo se ha tornado positivo en las dos

últimas décadas, entre otras causas, debido a los retornos de emigrantes españoles, y a que la emigración de españoles hacia otros países es hoy prácticamente nula. Pero la novedad, es que España se ha convertido en un país de inmigración. El flujo de inmigrantes ha venido aumentando desde principios de los ochenta y se ha convertido hoy en un componente importante del crecimiento de la población en toda la Unión Europea.

Actualmente, la llegada de inmigrantes representa entre el 85% y el 90% del crecimiento anual de la población de España, lo que equivale a decir que la población crece sólo gracias a la inmigración. En el futuro, se espera que el crecimiento natural se torne negativo, debido a la escasa natalidad y al creciente envejecimiento de la población. Sólo mediante mayores entrada de inmigrantes podrá mantenerse un cierto crecimiento demográfico. Si los inmigrantes dejan de llegar, o simplemente disminuyen los flujos, la población española empezará a decrecer.

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que de todos los componentes del crecimiento demográfico, las migraciones son las que están más sujetas a cambios rápidos y las que más directamente dependen de la evolución económica y de las decisiones políticas. Los expertos coinciden en que la inmigración no es la solución, en exclusiva, al problema demográfico de los países más desarrollados. El número de inmigrantes necesarios para paliar las carencias demográficas difiere sustancialmente con el número de inmigrantes para atender las necesidades a corto y medio plazo del mercado de trabajo y, con el número real de inmigrantes que se pueden integrar en los países de acogida. Que la inmigración no vaya a solucionar los problemas demográficos que existen en España no quiere decir en absoluto que la inmigración no sea positiva y necesaria para la población y la economía españolas. La inmigración es necesaria por muchas razones, entre otras para atender las ofertas de empleo del mercado de trabajo, y por eso es aconsejable favorecer la entrada regular de inmigrantes, teniendo en cuenta que el objetivo no puede ser exclusivamente resolver los problemas demográficos.

6.4. Problemas demográficos y políticas de apoyo a las familias.

Los efectos negativos a largo plazo de la baja natalidad son hartamente conocidos y han sido abundantemente comentados, formando parte de la base de una corriente, el natalismo, que se acompaña de una serie de propuestas políticas. Esta visión abusa del miedo al envejecimiento y pinta una sociedad futura decrepita, sin dinamismo ni fuerza creadora, que se arriesga a una fractura social por el peso

excesivo que provocan las personas mayores inactivas. No es ésta nuestra visión, una posición ideológica que parece condenar y culpabilizar de ese riesgo de fractura social a nuestros mayores, sin embargo tampoco es conveniente que en aras de un absurdo optimismo neguemos los problemas demográficos.

La pregunta sobre si debemos actuar sobre la natalidad y por qué, no debe centrarse en su papel en la evolución futura de la población, por muy importante que ésta sea, ya que ello lleva implícito oponer intereses actuales de las familias a los de las generaciones futuras. Un dilema éticamente dudoso y una postura que desprestigia las políticas de fomento de la natalidad, contaminadas por el discurso natalista, y, sobre todo, asegura su ineficacia, como ya se ha demostrado históricamente.

El muy bajo nivel de fecundidad en España, el más bajo de la Unión Europea, ha de ser tomado como síntoma de que algo no funciona en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que el número de hijos deseados por los españoles, hombres y mujeres, es superior al que efectivamente se tienen, las políticas de apoyo a la natalidad que proponemos no pueden consistir en incitar a las familias a tener más hijos, sino en atacar las razones que separan a la realidad del deseo. Aunque, en última instancia, la decisión de tener un hijo es de carácter individual y familiar, las estructuras y políticas sociales condicionan de tal manera la decisión, que resultan las únicas inteligibles, y su transformación y adaptación a los deseos de las personas debe erigirse en la finalidad de nuestra política demográfica.

El aprovechamiento de la capacidad y oportunidades que para toda la sociedad supone la entrada de las mujeres en el mercado laboral, tiene como contrapartida la asunción del coste económico de los servicios y prestaciones que suplan la ausencia de dedicación plena y única de la mujer/madre al cuidado de los hijos y del hogar. Hasta ahora, la sociedad en su conjunto, empezando por los gobiernos y las instituciones, y de manera significativa la empresa, no han tenido en cuenta este coste, que tendrán que internalizar en breve. El concepto de desarrollo sostenido, según el cual del beneficio del uso de nuestro entorno hay que deducir el coste de su mantenimiento a largo plazo, es ahora también aplicable a las reproducción demográfica. Si queremos aumentar la proporción de los que trabajan, mediante la incorporación de las mujeres, es necesario asumir el coste del mantenimiento a largo plazo de nuestra capacidad reproductiva.

7.- LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

El PSOE va a proponer un abanico de políticas de apoyo a las familias y, como consecuencia de ello, de incentivo a la natalidad. Una política que apuesta por una institución familiar de formas y esquemas plurales, adaptada a los cambios sociales y económicos que se han producido y se están produciendo en España. Estas políticas tienen por objeto mejorar el bienestar de las familias, de todos y cada uno de sus miembros, desde la igualdad, externalizando sus cargas, y creando servicios de atención integral.

El Estado y también las Comunidades Autónomas han de asumir las responsabilidades que la nueva sociedad, las nuevas familias, le demandan, reorientando sus políticas sociales y laborales, acompasando el reciclaje y renovación de estas políticas a los cambios que se están generando en su principal unidad básica de convivencia.

Nuestra concepción de la persona, y de la sociedad no se corresponde con el modelo tradicional de familia sobre el que se asientan las viejas estructuras de relaciones laborales, los horarios de trabajo, comerciales o escolares, los modelos de adquisición o acceso a la vivienda o los servicios y prestaciones públicas. Existen ya muchas familias, muchos ciudadanos, que no comparten ese modelo tradicional, que buscan nuevas y mejores respuestas, que vieron como los socialistas abanderábamos en España los cambios sociales, económicos y políticos más profundos, que engancharon nuestro país a la modernidad y que, ahora, esperan que también seamos nosotros los que lideremos las nuevas políticas para las familias. Esa reforma, en parte revolucionaria, nos corresponde hacerla de nuevo a nosotros.

Además de dedicar recursos para hacer posible la compatibilidad entre la familia y el trabajo, es necesario que introduzcamos cambios organizativos (muy especialmente en lo que se refiere a horarios) y de mentalidades (de los hombres y de la empresa), que sin duda van a tener que ser fomentadas, impulsadas y apoyadas desde la iniciativa política, es decir, pública. Porque armonizar los diferentes horarios (laborales, escolares, administrativos), facilitar las compras, disponer de más ocio y más tiempo para compartir con la familia, son objetivos globales que se intentan poner en práctica a través de esfuerzos en ámbitos locales, pero que deben estar coordinados e impulsados desde esferas más generales.

Es también necesario un cambio de la mentalidad empresarial. Hasta ahora ha imperado el modelo masculino tradicional del trabajador con una familia detrás, que no sólo no le dificulta su trabajo sino que le permite gozar de una total disponibilidad para el mismo. La mayoría de las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, para sobrevivir en el medio laboral, se ven obligadas a adoptar el mismo modelo, porque no existe otro. Sin embargo, ellas no disponen de una familia que les cuide y atienda el hogar, sino que tienen que seguir dedicándose a sus tareas domésticas, al cuidado de los hijos, haciendo compatibles la vida laboral y la familiar en detrimento de su tiempo libre e incluso de su salud. Puede parecer difícil, *a priori*, que las empresas acepten estos cambios, salvo que se perciban como un instrumento para “fidelizar” a los trabajadores en un mercado de escasez de mano de obra, como el que empieza a darse en Europa y el que se dará en el futuro en España.

Tenemos que impulsar un cambio de mentalidades para modificar el reparto de tareas en el seno del hogar. La resistencia actual de los hombres no se debe sólo a la voluntad de mantener una situación de privilegio, sino al obstáculo real de la persistencia de *roles* sociales y del modelo de inserción laboral.

En conclusión, la situación de las familias, la precariedad de apoyos y servicios de que disponen, los retos a los que se enfrentan, y los problemas de baja fecundidad que existen en España, debido a la anómala situación de los jóvenes, sólo mejorarán si acometemos una serie de políticas que hagan compatible la familia con el trabajo, y apuesten por unas familias en las que impere, externa e internamente, la libertad, la igualdad y la solidaridad.

8. MEDIDAS DE APOYO A LA NATALIDAD Y A LA FAMILIA:

8.1.1 Prestación económica por nacimiento:

1 - Se creará una prestación económica modulada de 500.000 ptas. para el caso de nacimiento del segundo hijo; y de 1.000.000 ptas. para el tercer hijo y cada uno de los siguientes. En los casos de parto múltiple, se aplicarán las mismas cuantías.

8.1.2 Prestaciones por hijos a cargo:

2 - Ampliar el límite de edad para el caso de las prestaciones por hijos a cargo no minusválidos o con minusvalías inferiores al 33%, actualmente fijado en los 18 años, hasta alcanzar la edad límite de 25 años, tal y como ocurre en las deducciones por hijos a cargo recogidas en el Impuesto sobre la Renta. También, se elevará la edad límite fijada en las pensiones de orfandad, establecida en 22 años, hasta alcanzar los 25 años.

3 - Equiparación gradual del techo de renta fijado para la percepción de la prestación, al nivel de ingresos establecido para aquellos contribuyentes que están obligados a declarar en el IRPF, y que normalmente se sitúa en torno a 1.500.000 de ptas.

4 - Se procederá a elevar la prestación hasta la cuantía fijada en las deducciones por hijos a cargo establecidas en el IRPF, que por lo general, se sitúa en 200.000 ptas.

5 - En cuanto a las deducciones por hijos a cargo fijadas en el IRPF, y con objeto de mejorar la ayuda establecida a las familias numerosas, se creará un tercer supuesto de deducción para los casos de familias con cinco hijos o más, de 400.000 ptas. Esta opción adicional, será también recogida en el caso de las prestaciones monetarias por hijo a cargo de todas aquellas familias que no declaren en el IRPF.

8.1.3 Otras medidas fiscales y sobre pensiones

6 - Modificación del IRPF, para incluir las desgravaciones por hijo en la cuota, con el fin de equiparar el tratamiento fiscal de todas las familias, independientemente de su nivel de renta. Para acabar con la desigualdad

que supone la existencia de deducciones por hijos a cargo en la base, y que entraña que el hijo de contribuyentes con mayores rentas "valga", en terminos de impuesto ahorrado, 2,7 veces más que el hijo económicamente más debil.

7 - Equiparación de las pensiones mínimas de viudedad con las mínimas de jubilación.

8 - Establecimiento de pensiones contributivas de jubilación para personas que, por su responsabilidad familiar, trabajan exclusivamente en tareas de su propio hogar, y que coticen al menos quince años, a través de un Convenio Especial voluntario con la Seguridad Social, mediante cotizaciones asequibles.

9 - Revalorización automática de los límites de renta establecidos para la percepción de las prestaciones monetarias, así como revalorización automática de todas las prestaciones existentes, en función del coste de vida.

8.2 Adopción internacional.

Durante estos últimos años, muchas parejas españolas han recurrido a la adopción de niños extranjeros, como medio para cumplir con sus deseos de constituir o ampliar una familia. Por distintas razones, en un gesto de generosidad y amor, siempre en interés de los menores, estas personas quieren adoptar a niños y niñas que, en sus países de nacimiento carecen de familia.

La experiencia nos está demostrando que, a pesar de la actual regulación de la adopción internacional en la Ley de Protección Jurídica del Menor, son muchos los problemas y dificultades que encuentran las familias que desean adoptar un menor extranjero. Los criterios para acreditar a las entidades colaboradoras en los procesos de adopción internacional (ECAIS), y la forma de actuar de alguna de estas entidades, han generado polémicas que no se han solventado con una adecuada cooperación entre los Ministerios implicados y las CC.AA. Por otra parte, existen muchos menores en países extranjeros que llevan meses esperando a ser adoptados por las familias españolas, aun cumpliendo con todos los requisitos que establecen tanto las autoridades españolas como las del país de origen.

La necesidad de agilizar los trámites de adopción internacional, simplificar el proceso y allanar las dificultades que existen con algunos países extranjeros, unido, de una parte, a la conveniencia de proporcionar a miles de menores la oportunidad de crecer y desarrollarse al amparo de una familia, y, de otra, a satisfacer las pretensiones de muchas parejas y familias que desean adoptar a un menor, es lo que hace aconsejable promover las siguientes medidas:

10 - Establecimiento de un Sistema Nacional de Coordinación de las Homologaciones de las Entidades Colaboradoras en los Procesos de Adopción Internacional (ECAIS).

11 - Creación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de un Servicio de Atención y Coordinación para todas aquellas personas y familias que deseen adoptar un menor en un país extranjero.

12 - Promoción del establecimiento de Acuerdos Bilaterales con aquellos países de los que provienen principalmente los menores en los procesos de adopción internacional. Estos Acuerdos se firmarán bajo el principio del interés superior del niño y respetando los derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional.

8.3 Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Una concepción progresista de la familia y de la maternidad, una visión amplia de las políticas de igualdad de oportunidades, nos obliga a equiparar y a apoyar socialmente las responsabilidades familiares de las trabajadoras y de los trabajadores, y a convertir el trabajo remunerado y el cuidado de los hijos e hijas en derechos y prácticas de valor equivalente. Conciliar la vida familiar afecta a ambos sexos, pero para ello es necesario que la sociedad supere el estereotipo que sitúa a los hombres en el espacio público, en el trabajo productivo, y a las mujeres en el espacio privado, en el trabajo informal y reproductivo.

Por eso es necesario adoptar medidas que contribuyan a remover los obstáculos derivados de la una socialización sexista de las responsabilidades familiares. Es imprescindible, también, garantizar el derecho que asiste a los hombres a atender a obligaciones relacionadas con el espacio privado, reproductivo e informal. No hay justificación alguna para excluir al padre de la crianza y atención a los hijos, porque ésta es una responsabilidad que ha de ser compartida. Las medidas de conciliación de la vida familiar y pro-

fesional que proponemos son las siguientes:

13 - Ampliación de los permisos retribuidos a los casos de adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente de menores, así como a los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de la persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal.

14 - Aplicación de reducción de jornada y excedencia para el supuesto de cuidado de la persona con quien se conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal.

15 - Reserva del puesto de trabajo, o de un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o de categoría equivalente durante todo el período de excedencia.

16 - Se considerarán como efectivamente cotizados a la Seguridad Social los tres años de excedencia por cuidado de hijos, con cargo a la imposición general.

17 - Se creará un cuarto año de excedencia, con iguales derechos, para uso exclusivo del otro progenitor, en caso de que así lo desee.

18 - Si durante el transcurso del permiso parental, el progenitor contratado a tiempo completo, se reincorporara al puesto de trabajo con contrato a tiempo parcial, se le abonará, con cargo a la imposición general, la diferencia de la cotización, hasta la jornada completa, el tiempo que reste de permiso.

19 - Incrementar el tiempo de permiso obligatorio, pasando de las 16 semanas a 18 semanas. En caso de parto múltiple, se sumarán al permiso dos semanas adicionales por cada hijo nacido, a partir del segundo.

20 - En caso de discapacidad del hijo nacido o adoptado el permiso podrá ampliarse hasta las 26 semanas en función del grado. Si la discapacidad es severa el permiso podrá extenderse hasta los 12 meses, desde el diagnóstico.

21 - Ampliación a veinte semanas de las suspensiones en los supuestos de adopción y acogimiento, preadoptivo o permanente, de cualquier menor de edad.

22 - Establecimiento de una suspensión por paternidad de cuatro semanas a disfrutar por el padre con carácter exclusivo, hasta la edad de nueve meses del hijo.

23 - Ampliación a veinte semanas de suspensión por maternidad en los casos de familias monoparentales.

24 - Asimismo, en el caso de la adopción internacional, a las veinte semanas de suspensión se añadirá el tiempo que los adoptantes deban permanecer de forma obligatoria en el país de origen del menor.

25 - Declaración de nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas, o cuando el contrato se haya suspendido por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o la lactancia, adopción o acogimiento.

26 - Ampliación de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social con prestaciones económicas para los casos de paternidad, adopción o acogimiento, lactancia. Igualmente se extenderá la obligación de cotizar a las situaciones de lactancia, paternidad y adopción o acogimiento.

27 - No será exigible período de carencia alguno, para tener derecho a la prestación por maternidad durante las seis semanas posteriores al parto.

8.4 Responsabilidad social de las empresas

La responsabilidad social de las empresas se define como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y las relaciones con sus interlocutores.

La principal responsabilidad de las empresas consiste en generar beneficios, pero sin duda hoy las empresas también se deben corresponsabilizar en el logro de objetivos sociales. Desde esta perspectiva, las empresas deben tener en cuenta que la corresponsabilidad social además de ser una obligación ética y ciudadana es, más que un gasto, una inversión a medio y largo plazo, para ellas y para el conjunto de la sociedad en la que desarrollan sus actividades.

La Unión Europea en diversos Consejos Europeos, ha ido estableciendo líneas de trabajo respecto al relieve que pueden tener el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas a la hora de afrontar los grandes cambios laborales, económicos y sociales. Estos trabajos, entre otros, han culminado en la elaboración de un Libro Verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Al mismo tiempo, diversas iniciativas

internacionales, procedentes de organismos como las Naciones Unidas, la OIT o la OCDE han avanzado en propuestas para el establecimiento de códigos de conducta para las empresas.

Conciliar la actividad económica en general y la actividad comercial e industrial de las empresas, con un desarrollo social y personal armónico, significa desarrollar una política de gestión de recursos humanos y de distribución y flexibilización de horarios y tiempos de trabajo, que haga perfectamente compatibles las obligaciones laborales y las familiares, de los trabajadores y las trabajadoras.

El desarrollo de políticas sociales en el interior de las empresas, fideliza a los trabajadores, mejora el ambiente laboral y por ende la productividad y coopera al interés general y a la sostenibilidad social. Varios países de la Unión Europea han puesto en marcha políticas y medidas para incentivar y promover la responsabilidad social de las empresas, en la mayoría de los casos los resultados están siendo muy positivos, y la satisfacción de todos los interlocutores es muy alta, obteniendo una gran consideración entre los consumidores aquellas empresas que desarrollan políticas sociales internas y externas.

El fomento de la responsabilidad social de las empresas es necesario por mucha legislación nacional que haya al respecto. De hecho, en España se han dado poco pasos en este sentido, y aún hoy nos conformamos con que se cumplan la normativa laboral y social. Sin embargo, a estas alturas es necesario proponer desde los poderes públicos medidas más ambiciosas, que hagan cada vez más compatible la vida familiar y la laboral, y que busquen, a través de iniciativas viables e imaginativas, soluciones a los cambios sociales que se están sucediendo. Se proponen las siguientes medidas:

28 - Promover las acciones necesarias para facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional real dentro de las empresas. Los acuerdos a impulsar desde los poderes públicos, deben estar dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades reales de los trabajadores en las empresas y reorganizar los tiempos de trabajo en las empresas, mediante reducciones de la jornada laboral, cambios en los horarios laborales por razones familiares y la creación de permisos especiales por razones familiares. Esta acción podrá acompañarse, a través de acuerdos con Administraciones locales y autonómicas, con la reorganización de los horarios de determinados servicios públicos, para hacerlos compatibles con los horarios de trabajo.

29 - Impulsar, desde el Estado, la creación por parte de las empresas de centros de atención para los hijos o mayores dependientes de sus trabajadores, a través de campañas públicas de sensibilización, labores de asesoramiento, acuerdos de partenariado entre empresas y las administraciones públicas, y la aplicación de beneficios fiscales.

30 - Se aplicarán beneficios fiscales a todas aquellas empresas que realicen cursos de formación para los trabajadores que, una vez cumplido el permiso, se reincorporen al puesto de trabajo. Así mismo, se crearán beneficios fiscales para aquellas empresas que realicen tareas de información a todos aquellos trabajadores en permiso.

31 - Impulsar un Acuerdo entre los agentes sociales para la elaboración de un Código de Conducta para promover la responsabilidad social y familiar de las empresas.

32 - Constitución de un Fondo para la creación de puestos de trabajo destinados a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, como instrumento necesario de inserción social.

8.5 Medidas de atención a menores y a personas dependientes.

Las familias, y dentro de ellas especialmente las mujeres, son las que atienden prioritariamente a las personas dependientes, entendiéndose por tales, no sólo a los mayores que no se pueden valer por sí solos, sino también a todas aquellas personas que, por distintas circunstancias, se encuentran impedidas para realizar cualquier actividad habitual en su vida diaria. Esta circunstancia condiciona a muchas mujeres y familias que se encuentran limitadas a la hora de realizar otras actividades familiares, de ocio o culturales. Incluso a la hora de atender a sus obligaciones laborales.

La conciliación de la vida familiar y laboral exige que se consoliden derechos de atención social, para que las instituciones públicas hagan realizable que los miembros de las familias que lo deseen puedan trabajar fuera del hogar. Con ello, todas las personas podrán vivir de forma más acorde con sus expectativas y proyectos, disponer de su propio tiempo y estar convenientemente atendidas cuando lo precisen. De este modo, las familias no se verán abocadas, obligatoriamente y sin ayuda, a dar respuestas en solitario y con sus propios medios a problemas que atañen a toda la sociedad.

33 - Creación de un subsidio, de ámbito nacional, de 50.000 ptas. al año, sometido a prueba de recursos, y con cargo a impuestos generales, para cuidados infantiles a domicilio por una tercera persona. Además, se realizará el pago de la cotización salarial correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional para aquellas personas que realicen dicha tarea y con cargo a la imposición general. El pago de la cotización será del 100%, cuando el niño tenga menos de 3 años, y del 50% en caso de hijos entre 4 y 6 años.

34 - Establecimiento de una Ley básica de atención a las dependencias. La situación de dependencia se clasificará teniendo en cuenta la asistencia requerida diariamente en: gran dependencia, dependencia grave y dependencia moderada.

35 - Articulación de planes de atención social y sanitaria entre el Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los que se determinen los objetivos mínimos comunes en materia de prevención, protección y asistencia sanitaria de las situaciones de dependencia. Estos planes se coordinarán, a su vez, con la red pública de servicios sociales para que dispensen de forma combinada sus diversos recursos.

- Ampliación y reforzamiento de la red pública de Servicios Sociales de tal forma que, en cuatro años, se hayan alcanzado los siguientes niveles de cobertura:

36 - El Servicio de Ayuda a Domicilio deberá haber alcanzado una cobertura de, al menos, el 60 por ciento de la población dependiente, y del 100% de la población con discapacidad física o psíquica severa. Este servicio podrá sustituirse por una prestación económica, siempre y cuando el usuario aporte la persona apropiada para sus cuidados.

37 - El Servicio de Teleasistencia, que funcionará como complemento o alternativa al Servicio de Ayuda a Domicilio en el supuesto de dependencia moderada, ofrecerá una cobertura, al menos, del 10% de la población dependiente.

38 - Las Residencias tendrán una dotación de plazas equivalentes, al menos, al 80 por ciento de la media de las existentes en los países de la Unión Europea.

39 - Los Centros de día deberán tener una provisión de las plazas de estancia diurna suficientes para cubrir, junto con la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Residencias, el 100 por ciento de las situaciones de gran dependencia y dependencias graves y, al menos, el 65 por ciento de las dependencias moderadas, alcanzando en su conjunto una cobertura del 90 por ciento de las dependencias de las personas mayores de 65 años.

8.6 Medidas en materia de acceso a la vivienda.

La dificultad de acceso a la vivienda es uno de los obstáculos que más directamente influyen en la ciudadanía a la hora de diseñar su proyecto vital y por tanto, condiciona la formación de nuevas familias. España es uno de los países de la Unión Europea en el que los jóvenes retrasan más su emancipación y una de las causas determinantes es la escasez y dificultades para acceder a una vivienda a un precio asequible. Para las familias las dificultades de encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades, a precios que se adecuen a su renta, ha aumentado en los últimos años. Como consecuencia de este crecimiento, el panorama es muy poco halagüeño para las nuevas familias y para las familias numerosas, que sufren verdaderas dificultades económicas para encontrar una vivienda que mínimamente sea acorde con sus necesidades.

En España la vivienda ha tenido tradicionalmente la consideración de bien de inversión, más que de uso, este hecho, junto a la política inadecuada de suelo, ha provocado un encarecimiento del precio de la vivienda, que se ha precipitado en los últimos años, en los que la construcción de viviendas, no ha redundado, sin embargo, en beneficio de aquellas personas y familias con rentas medias y bajas. No se han propiciado políticas de acceso a la vivienda de segunda mano y a la vivienda de alquiler, y el Estado tampoco ha buscado, en colaboración con las CC.AA y Ayuntamientos, que son las que tienen competencias en la materia, estímulos y estrategias para mejorar la ratio de accesibilidad.

Hoy la política de vivienda debe diseñarse desde una perspectiva transversal, teniendo en cuenta el desarrollo humano, el de las ciudades y los pueblos, para hacer posibles y compatibles la sostenibilidad humana, familiar y social con la medioambiental. Para mejorar la calidad de vida de las personas y la de sus relaciones. Mejorando el bienestar de las familias y su entorno laboral, educativo y de servicios. Muchas personas retrasan su proyecto familiar y muchas

familias ven frustrada sus expectativas y deseos respecto de natalidad, debido precisamente a las dificultades y costes para acceder a viviendas adecuadas. Por eso se precisan medidas que tiendan a garantizar un apoyo adecuado por parte de las instituciones a todos aquellos que afrontan un proyecto familiar.

La política de vivienda debe ser el resultado de la concertación y de la corresponsabilidad entre los tres niveles de la Administración. Las medidas que aquí enunciamos serán, entre otras, la base del nuevo modelo de política de vivienda, con una visión más social, más integral y más participativa que el actual.

40 - Construcción de 180.000 VPO/año. Este objetivo se asignará cada año por CCAA y por figuras, de acuerdo con indicadores objetivos de potenciales demandantes de vivienda, niveles de ingresos, etc.

41 - Promoción de la participación de las CCAA en el diseño del nuevo Plan de Vivienda.

42 - Actualización anual del precio máximo de la VPO de acuerdo con un indicador objetivo, así como de las ayudas que garanticen la accesibilidad de las VPO, para evitar tanto la imposibilidad de construir como la de adquirir este tipo de viviendas.

43 - Establecer la posibilidad de cofinanciación de las viviendas de promoción pública autonómicas, en condiciones análogas a las que se establezcan para las VPO destinadas a familias de menores ingresos, y fomentar la adquisición de viviendas usadas a precio análogo al de la VPO, así como la puesta en alquiler de viviendas tanto nuevas como usadas, optimizando el parque inmobiliario vacante, y otorgando una prioridad efectiva a las VPO destinadas a las familias de menores ingresos.

44 - Reducción del IVA de la VPO de régimen general.

45 - Aplicación gradual de la deducción por alquiler de vivienda a todos los contribuyentes cuyo nivel de ingresos no exceda de 3.500.000 de pesetas en declaración individual, y de 5.000.000 en declaración conjunta.

46 - Fomento del alquiler a través de una revisión de la LAU.

47 - Utilización de suelos públicos estatales para la construcción de VPO.

48 - Ampliación de la capacidad financiera de los Ayuntamientos para actuar en la política de suelo y de vivienda.

8.7 Medidas en el sistema educativo

La familia y la escuela son los principales medios de socialización del niño. De un tiempo a esta parte, se ha ido produciendo un desplazamiento hacía el sistema educativo del papel que en la educación tuvieron tradicionalmente las familias. Sin embargo, la colaboración entre familia y escuela es más necesaria que nunca, ya que hoy los centros educativos desempeñan más funciones y prestan más servicios que en el pasado. Familia y escuela educativo deben complementarse, apoyarse y colaborar en la educación, formación y atención integral a los niños y niñas.

Para ello, es necesario una reestructuración de las practicas organizativas tanto de la familia como la escuela, con el fin de hacer compatibles los intereses de los niños con las responsabilidades y obligaciones de los padres, estructurando adecuadamente los tiempos y los espacios de convivencia entre padres e hijos, de enseñanza y estudio, juego, descanso, etc. Todo ello, requiere la apertura del conjunto del sistema educativo y de los centros docentes al sistema social global, lo que permitirá integrar plenamente a estas dos instituciones, haciendo compatibles sus necesidades y obligaciones.

49 - Puesta en marcha de una red de Escuelas Infantiles, sostenidas con fondos públicas, que atienda a los niños entre cero y tres años hasta cubrir, en cuatro años, las necesidades de 250.000 familias.

50 - Implantación gradual de la gratuidad de los libros de texto.

51 - Los centros docentes permanecerán abiertos durante once meses al año, siete días a la semana y doce horas al día, para que cada Escuela se convierta, no sólo en el referente educativo, sino también en el social, cultural, deportivo, etc. del barrio o localidad.

52 - Los centros de día para atención a discapacitados psíquicos con una minusvalía superior al 20% tendrán la consideración de

Escuelas de Educación Especial, con independencia de la edad del discapacitado, siendo en estos casos gratuitos.

53 - Establecimiento de un fondo estatal para que los Ayuntamientos, en coordinación con los centros, las APAS y los alumnos, puedan atender a los alumnos que lo necesiten antes y después del horario lectivo, y organicen durante el tiempo no lectivo actividades diversas, relacionadas con la enseñanza de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, talleres de lectura, la informática, el deporte, las artes y la música.

54 - Garantizar el cumplimiento de la obligación legal de todos los centros sostenidos con fondos públicos de escolarizar de forma solidaria y equivalente a alumnos procedentes de minorías étnicas o culturales, o que tengan necesidades educativas especiales.

55 - Establecimiento en los centros de personal especializado, y al menos, de un educador o trabajador social que haga de puente entre centro escolar y la familia, para aquellos casos en los que se den dificultades de aprendizaje, o cuando lo aconseje la situación de la familia.

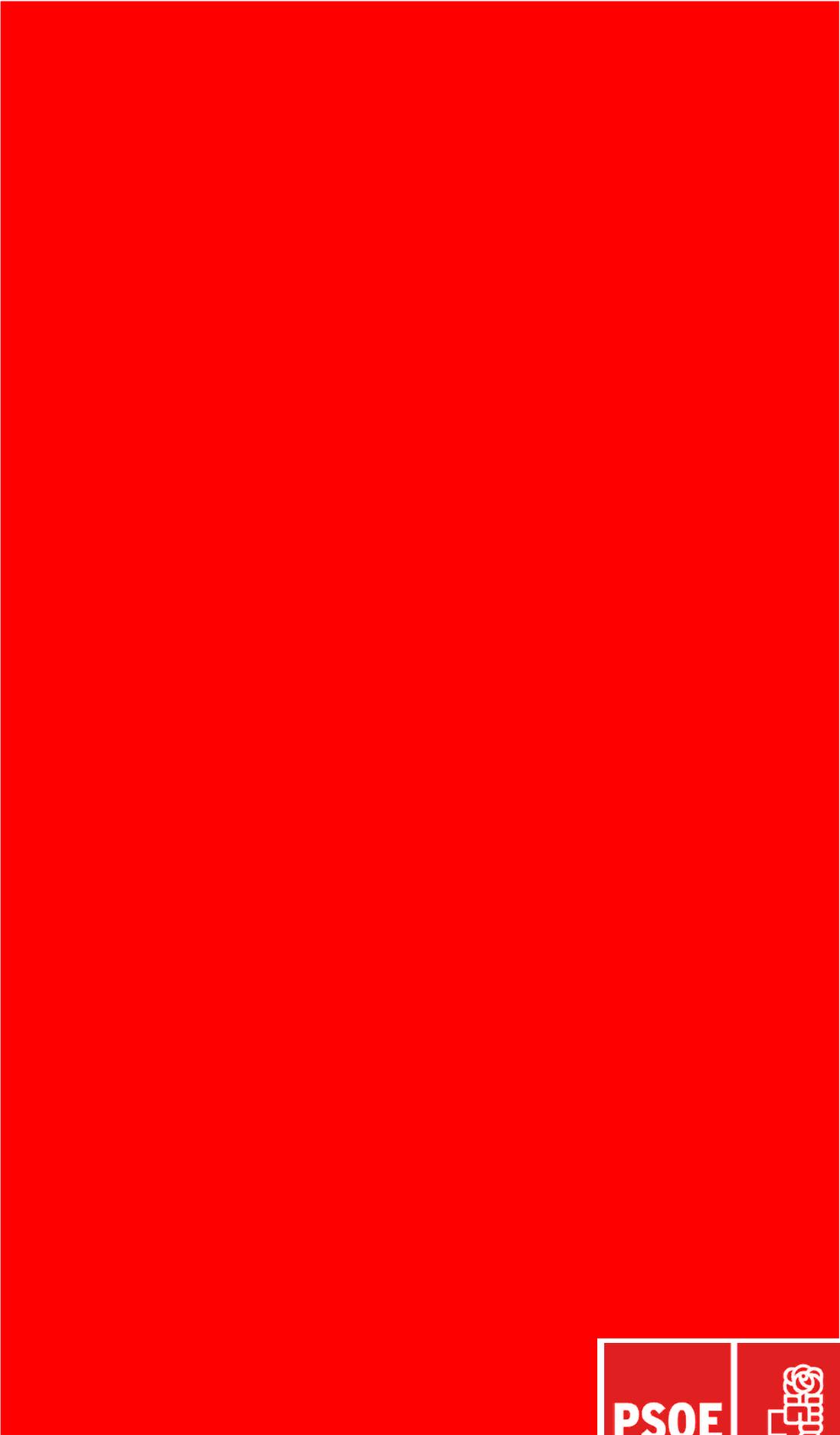
8.8 Administración familiar.

Las políticas para las familias, para ser eficaces y viables, sólo se pueden abordar desde una perspectiva integral teniendo en cuenta los factores y decisiones que afectan a la familia provienen de ámbitos diversos, y que por lo tanto es necesario establecer políticas transversales, a través de órganos que tengan esa capacidad. De la misma forma, es imprescindible que en un ámbito esencial en la sociedad como el de las familias, en el que son muchas y muy diferentes las instituciones, profesionales, expertos, entidades públicas y privadas que forman opinión y diseñan estrategias para la defensa y promoción de las familias, haya un órgano que recoja todo el caudal de conocimientos, propuestas, opiniones y estudios que realizan esas instituciones. A la vez, ese órgano puede convertirse en un asesor cualificado para el Gobierno de las políticas de familias. En este terreno proponemos las siguientes medidas:

56 - Creación de una Secretaría de Estado de Políticas Familiares, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que diseñará y ejecutará, en colaboración con otros Ministerios, las políticas de defensa y promoción de las familias.

57 - Creación de un Consejo Estatal de Políticas Familiares, para asesorar al Presidente del Gobierno, del mismo formarán parte diferentes entidades de promoción y defensa de las familias, expertos independientes y de la Universidad, así como representantes de las CC.AA. Se encargará de asesorar al Presidente del Gobierno, en todos aquellos aspectos relacionados con las políticas de familias, y propondrá, asesorará y será consultado por la Secretaría de Estado de Políticas Familiares en todas las materias relacionadas con su campo de actuación.

marzo 2002



socialistas ahora

